

VÍCTOR DE CURREA-LUGO

Una mirada al paramilitarismo en Colombia

El fenómeno paramilitar en Colombia recoge en su origen y desarrollo la complejidad del conflicto armado. Desde sus inicios, en la década de los 80, hasta su reciente unificación, las llamadas también Autodefensas han crecido en lo militar, territorial e incluso en el respaldo político por parte de sectores urbanos, a pesar de lo sanguinario de sus métodos. En su historia, repetidamente aparecen vinculados las Fuerzas Militares y, cada vez más, al narcotráfico. Lejos de representar una fuerza minúscula, cada día es más determinante en la guerra y en una eventual paz. El paramilitarismo no es un hecho accidental, es una política de Estado; una propuesta regional que ahora se sistematiza bajo unas siglas; y una respuesta para ganar adeptos entre las clases medias urbanas deseosas de salidas rápidas y radicales.

Durante la década de 1980, y recogiendo viejas experiencias del ejército, dirigentes regionales de partidos políticos, ganaderos, terratenientes, jefes locales de policía y mandos militares desarrollaron grupos clandestinos, armados y entrenados para atacar especialmente a campesinos en zonas de influencia de la guerrilla. Uno de sus desertores fue testigo de la colaboración estrecha con los grupos paramilitares de “comandantes militares, narcotraficantes, y líderes paramilitares; entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño y Víctor Carranza”,¹ nombres asociados con masacres, narcoterrorismo y asesinatos.

En el período 1984-1989, los narcotraficantes dirigieron una verdadera reforma agraria, útil no sólo para conseguir tierras sino para legitimar su poder social y político local, lo que les permitió diseñar alianzas con poderes regionales. Frente a esto, el Estado presentó dos caras contradictorias: por un lado, la participación de militares en estos procesos pues encontraban eco en su lucha contrainsurgente y a la vez participaban de las prebendas del poder local y regional; y por otro,

Víctor de Currea-Lugo es médico cirujano por la Universidad Nacional de Colombia, master por la Universidad de Salamanca y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid.
decurrea@hotmail.com

¹ Human Rights Watch / Americas, *Las redes de asesinos de Colombia: Militares, paramilitares y EEUU*, Nueva York, 1996, p. 20

la visión de las autoridades judiciales, a las cuales el Estado delegó, mayoritariamente, la persecución de los paramilitares.² Esto explica, en parte, por qué las víctimas del Estado por los paramilitares son fundamentalmente del sector judicial y en particular en la Fiscalía.³

En 1987, el Gobierno colombiano reconoció la existencia de 128 grupos paramilitares⁴ que, a mediados de 1997, constituyeron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente con más de 8.000 hombres. Desde 1994, una vez consolidados en el Magdalena Medio y en el norte del país, las AUC se han ido desplazando a otros departamentos. Varias poblaciones han quedado vacías debido a los éxodos masivos por la llegada de los paramilitares. Sus acciones se basan en la idea de “quitarle el agua al pez”.⁵

El proyecto paramilitar produce una negación del principio del monopolio de la fuerza por parte del Estado lo que conlleva, no sólo a la autorización a particulares para ejercer la violencia, sino a la casi nula penalización de esta violencia aunque produzca consecuencias tan graves. Las características iniciales de los paramilitares determinan parte de su situación actual: a) permanecen, a pesar de las diferencias internas, unidos bajo la bandera de la anti-subversión, b) se desarrollaron más bajo las dinámicas de proyectos locales que de un proyecto nacional, c) tal desarrollo local les generó desigualdades de politización, capacidad militar y formas de trabajo que pueden variar de una región a otra. Los paramilitares no son un proyecto nacional único y consolidado, sino la suma de proyectos regionales que se alimentan del clientelismo local en lo político, y de la formación de ejércitos privados de ámbito también local en lo militar.

Los análisis sobre el fenómeno paramilitar y sus vínculos con las Fuerzas Armadas se mueven entre dos extremos deliberados y/o simplistas: a) que los paramilitares no tienen ninguna relación con las Fuerzas Armadas y por tanto ellas no pueden comprometerse a terminar las acciones de aquellos,⁶ y b) que los paramilitares son una sola unidad con las Fuerzas Militares sin que entre unos y otros medie alguna diferencia o posible matiz, posición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Documentos de las AUC afirman que “nosotros reconocemos el callado heroísmo y el sentido de responsabilidad y devoción patriótica de las Fuerzas Armadas”,⁷ y aclaran que “las Autodefensas (...) no con-

² Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, *El caleidoscopio de las justicias en Colombia*, Siglo del Hombre Ed., Bogotá, 2001, Tomo I, pp. 376-379.

³ Para profundizar en la lógica estatal: Vicepresidencia de la República de Colombia, *Panorama de los Grupos de Autodefensa*, Bogotá, diciembre de 2000.

⁴ German Wettsein, “Los impunes, una minoría peligrosa”, *Nueva Sociedad*, Caracas, 1991, Nº 111, p. 158.

⁵ Carlos Medina Gallego, “Paramilitares, autodefensas y narcoterrorismo en Colombia. 1980-1990”. *Cuadernos Africa - América Latina*, Madrid, 1992, Nº 7, pp. 73-85.

⁶ Postura presentada en la reunión de Costa Rica (oct. 2000) por el representante del Gobierno colombiano, Reinaldo Botero Bedoya.

⁷ Autodefensas Unidas de Colombia, *Naturaleza político-militar del movimiento*, Montañas de Colombia, 26 de junio de 1997, p. 12.

sideramos enemigo a las Fuerzas Armadas”.⁸ Pero se trata, también, del desarrollo de operaciones conjuntas y de un continuo flujo de información entre los unos y los otros con la subsecuente división de tareas.

Militares y paramilitares

En el conflicto, el Estado presenta una cara social que se materializa (con graves desigualdades y poquísimos recursos) principalmente en los servicios de salud y educación, y una cara represiva representada en las Fuerzas Militares. Este discurso permite culpabilizar a la Fuerza Pública por sus atropellos pero sin que esto comprometa al resto del Estado, de tal manera que el Gobierno es cuestionado por la situación de los derechos humanos más como una víctima que como victimario.

Como en otros países de la región, “los militares no sólo no son reconocidos como impunes por los Gobiernos democráticos; además se sienten a sí mismos impunes al considerarse apóstoles de la paz y el orden”.⁹ Estas acciones se alimentan de un pensamiento en el cual hay un orden que proteger y un enemigo que eliminar por cualquier método.¹⁰ La división Ejército-Gobierno se traslada, con proporciones, a militares-paramilitares. Esto se materializa en una “combinación de formas de lucha” que incluye los métodos legales (cada vez más drásticos, mediante el uso de legislaciones de excepción) y acciones clandestinas.

Desde 1989, Colombia se ha convertido en el país receptor de la mayor cantidad de ayuda militar por parte de los EEUU en la región. Noam Chomsky afirma que los EEUU andan tras “el aparato represivo de torturas, desapariciones y asesinatos en Colombia” desde hace más de tres décadas.¹¹ En 1991, unidades de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA) apoyaron a las Fuerzas Armadas colombianas para la reestructuración de su aparato militar. En esa modernización “convirtieron a los paramilitares en componente clave de su aparato de inteligencia”.¹² Entre 1995 y 1999, los EEUU aumentaron en casi nueve veces la ayuda militar a Colombia.¹³

*El Gobierno
es
cuestionado
por la
situación de
los derechos
humanos más
como una
víctima que
como
victimario*

⁸ Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, *Estatutos*, disposiciones generales adicionales, (documento sin fecha).

⁹ German Wettsein, *op. cit.*, p. 162.

¹⁰ Peter Waldmann, “Represión estatal y paraestatal en latinoamérica”, *América Latina Hoy*, Madrid, 1995, N° 10, p. 21

¹¹ Noam Chomsky, “Ante los Guardianes de la Libertad”, *Magazín Dominical de El Espectador*, Bogotá, 9 de junio de 1996, N° 682, pp. 4-7.

¹² Human Rights Watch / Americas, *op. cit.*, p. 6.

¹³ Conclusión de un informe producido por la ONG Latin America Working Group y el Center for International Policy, finalizado en diciembre de 1999. El informe sostiene que Colombia recibe hoy más asistencia militar y policial de EEUU en entrenamiento, armas, equipos y asistencia, que lo que recibe toda América Latina y el Caribe juntos. <http://www.ciponline.org/facts>

“Una radiografía de seis años de conflicto en Colombia (muestra) que las quejas recibidas contra las Fuerzas Militares han disminuído de 3.000 en 1995 a 430 en el 2000”,¹⁴ sin embargo, el aumento de las violaciones de derechos de la población civil atribuidas a los paramilitares, la disminución de las atribuibles a los agentes del Estado y el hecho de que “el número de personas muertas o desaparecidas por razones políticas no ha sufrido variaciones en (un) mismo lapso”,¹⁵ permite presumir una transferencia de funciones sugerida por los vínculos entre militares y paramilitares que han sido denunciados por los mismos EEUU y por numerosas ONG internacionales.

Muchas de las acciones de grupos paramilitares han estado relacionadas con la falta de actuación de la Fuerza Pública, pero la pérdida de la noción de omisión como delito lleva a que el Estado se presente como respetuoso del Derecho Internacional Humanitario (DIH)¹⁶ en la medida en que algunas de sus acciones no son violaciones del DIH, aunque sus omisiones sí favorezcan abiertamente la acción paramilitar. No se cuestiona cuando el Estado cede a los paramilitares el monopolio de la fuerza, ni cuando éste viola los límites legales de tal monopolio con prácticas como minimizar las masacres producidas por agentes del Estado o justificarlas, reconocer su responsabilidad muchos años después, y presentar ante los medios de comunicación a campesinos como “guerrilleros muertos en combate”.¹⁷

Los intentos de las Fuerzas Armadas por doblegar a las guerrillas no han logrado su objetivo. Los militares insisten y han pedido al Gobierno de Pastrana crear cinco brigadas móviles antiguerrillas en breve,¹⁸ para pasar de 106 mil hombres armados a 140 mil en los próximos dos años, “duplicando el pie de fuerza de la democracia”.¹⁹ Pero la efectividad de tal operación ha sido mermada por la creciente capacidad militar de la insurgencia, por la incapacidad de los militares de cumplir sus tareas sin violar el Estado de derecho y por la mala distribución de los recursos para la guerra. La Embajada de EEUU en Bogotá manifestaba su preocupación por destinar más del 75% del presupuesto militar en salarios y por existir más militares en el despacho que en el terreno que un país sin conflicto armado.

¹⁴ “Mejora en Derechos Humanos en Colombia”, *El Tiempo*, Bogotá, 4 de febrero de 2001.

¹⁵ Comisión Colombiana de Juristas, *Colombia, Derechos Humanos y Derecho Humanitario: 1995*, Bogotá, 1996, p. 9.

¹⁶ Sobre los problemas de aplicación del DIH en el caso colombiano: Víctor de Currea-Lugo, “¿Es posible “humanizar” la guerra de Colombia?”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, Madrid, primavera 2001, Nº 74, pp. 29-43.

¹⁷ Sobre vínculos entre militares y paramilitares: Human Rights Watch / Americas, *op. cit.*; Human Rights Watch, “The Ties That Bind: Colombia and Military-Paramilitary Links”, febrero de 2000; Carlos Medina Gallego, *op. cit.*, pp. 73-85; “Vladimir se confiesa”, *Semana*, Bogotá, 14 de julio de 1997), pp. 30-34.

¹⁸ “El Plan Colombia es una excusa ridícula de las FARC, afirma E.U”, *El Tiempo*, Bogotá, 15 de noviembre de 2000.

¹⁹ “Controversia por milicias”, *El Tiempo*, Bogotá, 25 de noviembre de 2000.

De lo militar a lo político

Tanto los grupos guerrilleros (FARC, ELN) como los paramilitares se han hecho con el control político en distintas zonas del país por medio de las armas.²⁰ En 1999, en 133 de 1.074 municipios no había presencia de la policía,²¹ cifra que en el 2001 se elevó a 199, y en muchos otros la Fuerza Pública no tiene ningún control en las áreas rurales.

El primer paso del avance político de los paramilitares fue su delimitación como grupo con un discurso propio, el cual se ha ido modificando. Ahora se definen como parte de un “movimiento civil antsubversivo”²² que apuesta por la “resistencia civil”.²³ Adoptaron algunas reivindicaciones socio-económicas (como la reforma agraria) y pusieron rostro al movimiento con la entrevista que concedió el jefe paramilitar Castaño a una televisión²⁴ en la que afirmó que “mi ética no admite el asesinato” y que “todo me hace llorar”. En sus documentos los paramilitares usan expresiones como la Constitución, el orden democrático, la noción de la “legítima defensa” y, cada vez más, muestran una “cara política”, tratando de aparecer ante la opinión pública como una “guerrilla de derecha”.²⁵ Este esfuerzo por ganar reconocimiento político ha tenido eco en sectores de la clase media urbana.²⁶ Así, lograron poner el énfasis en que no importaba que hubieran hecho masacres usando motosierras y decapitando personas, sino que la valentía de reconocerlo los absolvía. En esa lógica se ha ido legitimando el paramilitarismo.

A este hecho siguieron las declaraciones de los militares donde planteaban que, por culpa de las normas existentes (Estado de derecho), no pueden hacer su trabajo; y los llamamientos de Pastrana a establecer la pena de muerte, propuesta que tuvo eco en la mismísima Corte Suprema de Justicia²⁷ —Samper en la mitad de su mandato propuso lo mismo— y, recientemente, la expedición de la Ley de

²⁰ “Alcaldías, en zona de riesgo”, *El Espectador*, Bogotá, 29 de octubre de 1999, p. 10 A.

²¹ “Sin seguridad en 133 municipios”, *El Espectador*, Bogotá, 7 de junio de 1999, p. 10 A.

²² Autodefensas Unidas de Colombia, “¿Por qué crecen las AUC?”, www.colombialibre.org, 23 de abril de 2001.

²³ Autodefensas Unidas de Colombia, “La resistencia civil: una obligación ciudadana”, www.colombialibre.org, 23 de julio de 2001.

²⁴ Entrevista a Castaño realizada en el programa “Cara a cara” por Dario Arizmendi y transcrita en la página web de los paramilitares www.colombialibre.org, diciembre de 2000.

²⁵ Eduardo Pizarro, “¿Grupos paramilitares, de autodefensa a guerrillas de derecha?”, *Cambio 16*, Bogotá, 26 de enero de 1998.

²⁶ “Es significativo que una encuesta reciente de (radio) Caracol confirme que el 77% de los colombianos rechazan la política de Pastrana contra las AUC, lo cual significa que no sólo crecen las AUC, sino también su respaldo popular, a pesar de tener al Gobierno y todos los medios informativos en su contra”, Autodefensas Unidas de Colombia, *op.cit.*, 23 de abril de 2001.

²⁷ “Cortes respaldan mano dura”, *El Tiempo*, Bogotá, 14 de diciembre de 2000; “Pena de muerte es necesaria”, *El Tiempo*, Bogotá, 13 de diciembre de 2000.

Para conseguir el reconocimiento del Estado y su interlocución, los paramilitares optaron por el secuestro de un grupo de parlamentarios

Seguridad y Defensa Nacional (agosto de 2001), con la cual busca “hacer la guerra” dentro del derecho (por lo menos dentro de su formalidad).

Para conseguir el reconocimiento del Estado y su interlocución, los paramilitares optaron por el secuestro de un grupo de parlamentarios. El Gobierno negoció con ellos, a través del Ministro del Interior, en noviembre de 2000.²⁸ Este acercamiento público entre el Gobierno y los paramilitares desagradó a las FARC, quienes pidieron al Estado perseguir a los paramilitares con el argumento de que “éstos cometen delitos y de que están fuera de la ley, de que son ilegales”,²⁹ el 12 de noviembre de 2000. Interrumpieron el diálogo hasta la cumbre entre Pastrana y el comandante de las FARC, en febrero de 2001.

Otro paso era acercarse a otros sectores de la sociedad colombiana, lo que implicaba esperar el desgaste del proceso de paz entre el Estado y la guerrilla o incluso producirlo. Los paramilitares estuvieron dispuestos a atacar la zona de despeje, sabiendo que eso aumentaría su popularidad en algunos sectores pero podría generar reacciones adversas entre los que todavía guardan esperanzas en el proceso con las FARC. Una vez desprestigiado el proceso de Pastrana, la derecha propuso la creación de milicias, como ocurrió en la asamblea de la Federación de Ganaderos (Fedegan) a finales de 2000, para hacer frente a las FARC.³⁰

El candidato presidencial, Alvaro Uribe Velez, saltó a la palestra para recoger el sentimiento nacional orquestado desde meses antes: la salvación nacional por la vía de las armas.³¹ Uribe se alimenta de la simpatía de sectores de la clase media urbana con el paramilitarismo, la ausencia de líderes y la necesidad de éstos, los errores del proceso de paz de Pastrana, y las críticas a la zona del despeje sintetizadas en que tal acto constituyó “la entrega del país a la guerrilla”. En los últimos meses ha multiplicado notoriamente sus seguidores debido a sus promesas, acompañadas de una buena imagen, de solucionar los problemas en poco tiempo —por esto mismo la gente votó por Pastrana—, entre las que se encuentra crear una milicia de un millón de hombres para acabar con lo males del país.³²

Como con Chávez y Fujimori, de Uribe se esperaría un control de poder absoluto en la figura del presidente, un manejo mesiánico de la política acorde con una propuesta neopopulista. Para algunos, la llegada al poder de Uribe es improbable pero eso no quiere decir que sus tesis, cada vez más aplaudidas, no generen importantes corrientes de opinión. Mientras los guerreros de la derecha se politizan, los candidatos de derecha se militarizan y los caminos parecen juntarse dentro de la estrategia de crear un “Frente de Liberación Nacional” como hizo la guerrilla en El Salvador y en Nicaragua.

²⁸ “Cara a cara”, *Semana*, Bogotá, 17 de noviembre de 2000.

²⁹ Entrevista a Manuel Marulanda Velez Entrevista a Manuel Marulanda Velez: Arturo Alape, “El Estado debe quitarse la careta”, *El Espectador*, Bogotá, 31 de enero de 1999, pp. 22 A y 23 A.

³⁰ “Controversia por milicias”, *El Tiempo*, Bogotá, 25 de noviembre de 2000.

³¹ “El fenómeno Uribe”, *Semana*, Bogotá, 16 de diciembre de 2000.

³² Miguel Angel Bastenier, “Colombia, último Plan”, *El País*, Madrid, 17 de diciembre de 2000, pp. 1-3.

La nueva coyuntura: de Castaño a oscuro

El salto de los paramilitares a lo político no significa renunciar a lo militar. Así lo demuestran sus continuas reorganizaciones, la persistencia en métodos crueles,³³ su crecimiento en áreas urbanas y para fines que incluyen políticas anti-sindicales —Coca Cola aparece involucrada en la financiación de paramilitares a cambio de que estos controlaran las acciones sindicales dentro de la empresa—. ³⁴ Se han producido denuncias sobre apoyo de las empresas petroleras transnacionales en la financiación y/o apoyo de grupos paramilitares. Según Castaño, la fuerza paramilitar posee 11.000 combatientes y, debido a la complejidad de sus acciones, necesita más recursos que las colaboraciones de los poderes locales. Tratando de no repetir la experiencia de secuestros que disparó el rechazo a las guerrillas,³⁵ el paramilitarismo centra en el narcotráfico el grueso de su financiación.³⁶ Lo asumen con transparencia argumentando que hacen lo mismo que sus enemigos —la guerrilla—, y dicen “no querer” secuestrar ni extorsionar pero necesitan dinero para su justa lucha, dando forma a su discurso autojustificador.

Esta autonomía financiera se suma a la necesidad de pasar de ser un grupo que comete masacres a un grupo que debe responder al combate directo ante los ataques de las FARC, sabiendo que la presión hace cada vez más difícil que el ejército los apoye tan abiertamente. Por eso, buscan cada vez más una autonomía militar, lo que no quiere decir renunciar a sus vínculos con los militares.

La tercera autonomía perseguida es la política. La limpieza de imagen de Castaño³⁷ y su paso de jefe militar de las AUC a jefe político se enmarcan en la búsqueda, por parte de los paramilitares, de un espacio político propio. Para ello se distancian de los políticos tradicionales rechazando la “clase política dinástica, con el del fin Serpa apoyando al monarca Andrés (Pastrana) en su utópico Proceso de Paz”.³⁸

³³ Según el Gobierno, los paramilitares son responsables de la gran mayoría de masacres, con un aumento sostenido de su participación desde 1998. Vicepresidencia de la República de Colombia, *Op. cit.*, p. 4. Para el año 2000, se les adjudicó el 70% de las masacres.

³⁴ “60 paramilitares operan en Bogotá”, *El Tiempo*, Bogotá, 5 de mayo de 2001; “Sindicalistas de EEUU demandarán a Coca-Cola por nexos con paramilitares”, *El Tiempo*, Bogotá, 20 de julio de 2001.

³⁵ Esto no quiere decir que los paramilitares no secuestren, sino que su economía depende más de otras fuentes. Los paramilitares suelen secuestrar para castigar a supuestos colaboradores de la guerrilla que luego son asesinados. Según el Gobierno, “de 45 secuestrados en 1998, las autodefensas pasaron a ejecutar 106 en 1999 y 203 durante los primeros diez meses de 2000”. Vicepresidencia de la República de Colombia, *op. Cit.*, p. 5.

³⁶ “Narcotraficantes financian a las Auc, dicen en Suecia”, *El Tiempo*, Bogotá, 13 de junio de 2001; “Paramilitares tienen vínculos con narcotráfico: ONU”, *El Tiempo*, Bogotá, 10 de mayo de 2001.

³⁷ La limpieza no es sólo un truco publicitario sino también una tarea militar. “Asesinado el principal testigo contra Carlos Castaño”, *El Tiempo*, Bogotá, 30 de mayo de 2001.

³⁸ “Contra los ‘pactos retóricos’ y las ‘clases políticas’ dinásticas”, www.colombialibre.org, 17 de abril de 2001.

En esta vía, en septiembre de 2001, lanzaron su llamado Movimiento Nacional Democrático. Desarrollan un nuevo lenguaje (página web con editoriales permanentes) y entran en contacto escrito con diferentes candidatos presidenciales, dirigentes nacionales y los más variados sectores. Este espacio político ha sido ganado principalmente al de las guerrillas,³⁹ realizando para ello desde masacres hasta el acercamiento a líderes y a movimientos sociales, como las protestas campesinas contra una zona para el ELN o las reivindicaciones de los cultivadores de coca en la región del Catatumbo.⁴⁰ Se aprovechan de la fragilidad ideológica de la guerrilla, lo que permite el reclutamiento a sus filas por mejores salarios y el ejercicio del clientelismo armado con los campesinos que antes estaban bajo control guerrillero; y el desplazamiento forzado,⁴¹ ya sea a través de amenazas y/o de masacres. Además, la politización del paramilitarismo permite la captación mediante un discurso de aparentes "guerrillas de derecha"; y el apoyo de sectores con capacidad de pago, en la medida que estos pasan de un pago obligado de "impuesto revolucionario" a una "contribución" con una causa que en principio comparten en cuanto estrategia contraguerrillera.

Motivo de debate, al interior de los grupos paramilitares, es si pasan a constituirse en una propuesta político-militar, lo que implicaría enfrentarse al Estado y a poderes locales contrarios a tal independencia;⁴² o si someterse a unas reglas de juego en las cuales son la mano negra del *establishment*, con lo cual a pesar de los eventuales e inevitables choques con las Fuerzas Armadas, no entrarían en su confrontación directa. Otra discusión se cierne sobre cómo responder a las arremetidas de las Fuerzas Armadas y a las acciones del Estado tras los allanamientos, en mayo de 2001, de la Fiscalía en contra de los cuales reaccionaron públicamente varios políticos. Tal debate precipitó la renuncia de Castaño⁴³ y la reunión nacional extraordinaria de la cúpula paramilitar.

El Estado sigue sin asumir una actitud clara ante el paramilitarismo. Al respecto, tiene presiones de la comunidad internacional y de las FARC en la mesa de

³⁹ Es significativo la forma como las AUC desplazaron al ELN de Barranca, no sólo copando sus antiguos roles sociales de imposición de un determinado orden en los barrios y de organización comunal y de actividades deportivas, sino incluso incorporando en sus filas una parte importante de los otrora miembros del Frente Urbano de Resistencia Yariquíes -FURY- del ELN.

⁴⁰ "AUC promovieron protestas coccaleras en Tibú: Policía", *El Tiempo*, Bogotá, 10 de junio de 2001.

⁴¹ Los paramilitares son responsables al menos del 53% del desplazamiento forzado: Vicepresidencia de la República de Colombia, *op. cit.*, p. 4.

⁴² Hay que recordar que la confrontación con el Estado le significó la derrota al cartel de Medellín, mientras que la negociación y la compra de funcionarios, le representó un triunfo temporal al cartel de Cali.

⁴³ En su carta, tras los allanamientos que hizo el Gobierno a casas de líderes de las AUC, Castaño rechazó que se considerara a las Fuerzas Armadas como enemigas. La renuncia de Castaño se produce el 30 de mayo, provoca una Conferencia Nacional Extraordinaria y fruto de ésta, aparece una nueva recomposición de la dirección de las AUC. Su renuncia, colocada en la web durante varios días decía: "Compañeros de causa: somos en las AUC amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Ese principio es inviolable. Respéntenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes. Carlos Castaño".

negociación —mediante la formación de una comisión anti-paramilitar—, de los gremios, que cada vez piden salidas a la presión de la guerrilla o el derecho de autodefenderse entendido dentro de la lógica paramilitar, y de los propios militares que no quieren ver en el Gobierno que defienden a sus propios perseguidores por acciones que aquellos consideran válidas. A estas presiones se ha ido sumando EEUU que han condenado el paramilitarismo⁴⁴ y el miedo de algunos sectores de la burguesía nacional a que los paramilitares desborden el "trabajo sucio" y se conviertan más en un problema que en una solución.

Las presiones han dado lugar a la destitución del general Rito Alejo del Río y su captura por conformación de grupos paramilitares, los allanamientos y las capturas de paramilitares.⁴⁵ Por otro lado, el Estado sabe que sin el paramilitarismo no hubiera logrado sacar a las FARC del departamento de Urabá, golpear al ELN en el Sur de Bolívar y en la región del Cesar, ni tomar la ciudad de Barranca, el otrora bastión de la insurgencia. Además, los paramilitares han logrado bloquear el proceso de paz con el ELN, imponiéndole al Gobierno su negativa.

Por el momento, la táctica paramilitar incluye obtener un reconocimiento político similar al de las FARC; y la exigencia de una mesa de negociación hacia la búsqueda de algún indulto o ley especial que les permita resolver el problema jurídico de sus masacres (pues el problema político, según ellos, está resuelto con la lógica de la anti-subversión). Pero, las posiciones internas en las AUC están divididas tanto en lo militar (por su dinámica regional, casi feudal de la guerra) como en lo político (no logran definir una propuesta frente al Estado), y a sus enemigos se suman sicarios que antes servían al narcotráfico. En la negociación entre las FARC y el Gobierno, el fenómeno paramilitar es una molestia que las FARC no quieren dejar de lado. A pesar de su aparente debilidad, el ELN les ha golpeado en sus propias bases⁴⁶ y el Estado ha detenido importantes comandantes (Salomón y Julián, Careto y Mochacabezas). Su rechazo a ciertas organizaciones como la Cruz Roja Colombiana⁴⁷ y la postura internacional en su contra les dificulta cada vez más su deseo de ganar un reconocimiento político.

*Por el
momento,
la táctica
paramilitar
incluye obtener
un
reconocimiento
político similar
al de las FARC*

⁴⁴ "Los paramilitares son la peor amenaza contra Colombia", *El Tiempo*, Bogotá, 5 de abril de 2001; "EEUU estrecha cerco a paramilitares", *El Tiempo*, Bogotá, 4 de mayo de 2001.

⁴⁵ Según el Gobierno, entre 1980 y 2000, se han producido 852 capturas y 145 muertes en combate de paramilitares, y en el año 2000, se presentaron 64 combates entre paramilitares y Fuerza Pública: Vicepresidencia de la República de Colombia, *op. cit.*, p. 11 y 12. Otros actos relacionados es la reciente condena al general Uscátegui, de la Justicia Penal Militar, por su participación en la masacre de Mapiripán en 1997. Esta condena recibió incluso el apoyo de los EEUU.

⁴⁶ En los partes de guerra del Area Darío Ramirez Castro del ELN, de abril 21 y junio 8 de 2001, y del Frente de Guerra Nororiental, de junio 17 de 2001 (en www.eln-voces.com) muestra que en varios ataques en el Sur de Bolívar produjeron serias bajas y daños entre los "paramilitares".

⁴⁷ En carta al Jefe de la Delegación del CICR en Colombia, los paramilitares dicen que "y las AUC siempre hemos sostenido que ésta entidad humanitaria colombiana (en referencia a la Cruz Roja Colombiana), no debe participar en actividades relacionadas con el conflicto, por razones indiscutibles que ya hemos sustentado ante ustedes" en: página web: www.colombialibre.org, mayo 1 de 2001.

Las declaraciones del Gobierno no logran convencer ni a Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos, ni a la sociedad en general de la inexistencia de vínculos entre paramilitares y militares.⁴⁸ Es común a todas las partes del conflicto (menos al ELN), incluyendo la Fuerza Pública, el rechazo de mecanismos internacionales como una eventual comisión de la Unión Europea, de Naciones Unidas o de organizaciones internacionales como *Human Right Watchs*. Los paramilitares, al igual que las FARC y que el Gobierno, no parecen susceptibles a tales presiones internacionales, las múltiples solicitudes de disminuir la crueldad del conflicto, ni mucho menos a las solicitudes de las agencias humanitarias.

Según el informe de Amnistía Internacional “la convivencia entre las fuerzas de seguridad, en especial el ejército, y los grupos paramilitares no solo continuó sino que, de hecho, aumentó. La colaboración entre ambos incluía el intercambio de información, la entrega de prisioneros, el suministro de munición, y patrullas y operaciones conjuntas en las que cometían graves violaciones a los derechos humanos. (...). Según los testimonios jurados, los paramilitares se relacionaban abiertamente con el ejército y la policía y mantenía a las afueras de Puerto Asís una base donde llevaban a las personas secuestradas para torturarlas y matarlas. La base estaba situada a solo centenares de metros de la jefatura de la brigada 25. Los dirigentes paramilitares se reunían periódicamente con oficiales del ejército”.⁴⁹

¿Qué hacer con el paramilitarismo?

Es innegable que existe y, aunque su vinculación al Estado es fuerte, su subordinación no es absoluta. ¿Habría que crear una mesa de negociación con los paramilitares,⁵⁰ con el riesgo de dejar en la impunidad muchos de sus crímenes? o, si se opta por la confrontación militar —suponiendo que los militares realmente la hicieran, cosa que se duda— ¿empujaría ésto a los paramilitares a convertirse en guerrillas de derechas?

El paramilitarismo también se nutre de esa noción neoliberal y posmoderna de que todo vale, que todo puede ser privado/privatizable (incluido la justicia), que el Estado de derecho no tiene ya monopolios (ni siquiera el de la fuerza), que el

⁴⁸ En el atentado contra el sindicalista Wilson Borja (diciembre de 2000) se demostró la participación de varios oficiales de las Fuerzas Armadas tanto en servicio activo como retirados. En un informe oficial se presentan como acciones realizadas por el paramilitarismo las masacres de Trujillo, Mampiripán, Barranca y La Gabarra, cuando la primera de ellas fue cometida por miembros del ejército en servicio activo (tal como lo aceptó el mismo Gobierno ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA), y en las tres últimas, está comprobado la vinculación de las Fuerzas Armadas: Vicepresidencia de la República de Colombia, *op. cit.*

⁴⁹ Amnistía Internacional, *Informe 2000*, EDAI, Madrid, 2001.

⁵⁰ Algunos sectores de la iglesia ya lo han planteado, varios líderes ganaderos e industriales han dicho que el Estado debe darles el mismo trato que a los grupos guerrilleros y el candidato presidencial Serpa ha dicho que estaría dispuesto al diálogo con las Autodefensas.

⁵¹ José Eduardo Faria, “Economía y derecho: en el cruce de dos épocas”, *El otro derecho*, Bogotá, 2000, N° 24, pp. 11-45.

derecho deja de ser una jerarquía de normas para volverse una peligrosa red,⁵¹ y que la política es un fenómeno auto referenciado que no se relaciona con la economía ni con las diferencias de clase.

Todo lo que se haga o no en relación con el conflicto colombiano será relacionado con el paramilitarismo, en una coyuntura en que la extrema derecha insiste en la quiebra del Estado de derecho para "salvar" el Estado de derecho; los paramilitares en hacer la guerra argumentando que el Estado no puede; la guerrilla sigue en la guerra como vía para conseguir la paz que, según ellos, el Estado no quiere; los militares haciendo la guerra para defender lo poco que queda del Estado (y las prebendas que reciben gracias a la guerra) y el Estado como una ONG esperando recursos internacionales y a que pase la guerra para entonces sí hacer valer los derechos humanos. Pero los poderosos (legales e ilegales) no quieren ceder y las leyes pierden sus nobles propósitos entre el tumulto colombiano. Así, al Estado de derecho parece que le suplantarán cada vez más un Estado de derechas.